

# Una nueva crisis universitaria

ANGEL E. ALVAREZ DIAZ

Este artículo se escribe cuando las universidades nacionales viven su enésima crisis presupuestaria. Como pensamos que ésta no es más que una de las tantas de la larga cadena que nos conducirán al caos de no implementarse correctivos de urgencia, no hablaremos nada de los detalles particulares de esta nueva tensión. Es preferible tratar de reflexionar sobre las causas estructurales que las determinan y señalar algunas medidas implementables a corto plazo para contrarrestarlas en el futuro.

Para explicar la crisis de la educación superior hay que reflexionar un poco sobre el funcionamiento global de la sociedad venezolana. Nuestro país funciona como unidad política gracias a la existencia de un pacto caracterizado básicamente por dos rasgos: la inclusión de los más diversos sectores, clases y grupos en un sistema de compromisos resultantes de la distribución de prebendas y beneficios que provienen de la renta petrolera, y, en segundo lugar, el monopolio de la acción directa por parte de los partidos que obstruyen y mediatizan cualquier intento de participación que escape de sus canales.

Nuestras universidades no son una realidad distinta a la de todo el país. Por más que se proclame o aspire la autonomía, ésta nunca será aislamiento. Por esta razón, en las universidades se expresan de modo particular las dos características antes anotadas. De un lado, los centros de enseñanza superior funcionan como sistemas de distribución de prebendas y beneficios materiales entre los miembros de su comunidad más que como institutos de formación de recursos humanos. Del otro lado, las universidades viven una excesiva penetración por parte de los partidos políticos de todo color que le impiden resolver como unidad los problemas planteados por su crecimiento. Seguidamente se argumentará con más claridad sobre estos dos aspectos del problema universitario.

## LA UNIVERSIDAD POPULISTA

Antes que nada valdría la pena preguntarse por cuáles son los objetivos reales de la educación superior en el país. Pensamos que en este sector, como en muchos otros del sistema político venezolano, hay una incongruencia entre los fines reales y los declarados. Una y otra vez se ha proclamado que nuestro sistema educativo, y en particular la institución universitaria, funciona para lograr el fortalecimiento de la democracia y formar los recursos humanos indispensables para el desarrollo. Estos fines, muy nobles por cierto, tienen muy poco que

ver con la dinámica real de los centros de enseñanza superior.

La educación venezolana, y en particular la superior, funciona más para la distribución de prebendas que para la adecuada formación técnica y científica de los estudiantes. La educación superior es usada como una vía para drenar tensiones y mitigar el conflicto. Ella constituye un camino para la promoción social real o, por lo menos, para mantener vigente la expectativa de ascenso. De este modo contribuye al mantenimiento de un orden político, por algunos denominado populista, que se fundamenta en la capacidad para incluir a los más diversos sectores sociales en la distribución de la renta petrolera. La lógica de nuestra enseñanza superior es más la distribución de títulos que la formación de profesionales. Que del proceso distributivo resulten egresados bien entrenados o no, es otro problema.

El ciudadano común percibe con claridad este hecho y es perfectamente racional cuando aspira para sí o para sus hijos a una formación universitaria que le garantice el sustento. Por esta razón acude a las universidades a reclamar su porción de torta petrolera con sabor a educación gratuita. Demás está decir que, por otro lado, el sistema educativo no abre ninguna otra alternativa real al bachiller que no sea la universidad.

Con el crecimiento permanente de la población que reclama "cupos para todos" crecen también los requerimientos de personal docente y administrativo lo cual es agravado por el hecho de que se mantienen casi inamovibles las estructuras académicas, la docencia tradicional y los sistemas viejos de organización de la burocracia. Así, no sólo crecen los requerimientos de personal, sino que se emplea más personal del que se necesitaría si se administrara con criterio de economía de costos. Pero el criterio para administrar no es el costo-beneficio, sino la eficacia con la que se logra el fin político de mantener los conflictos reducidos a su mínima expresión.

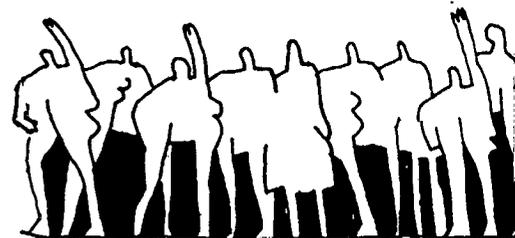
Este modelo de crecimiento de la

población universitaria encuentra hoy dos límites. Uno es de tipo físico. Las universidades existentes no pueden ampliarse irracionalmente sin ocasionar daños irreparables en su ambiente, tal como es el caso de la U.C.V. Además, tampoco es posible crear a diestra y siniestra centros de enseñanza para paliar el problema, sin afectar sus verdaderas causas. El otro límite, tal vez más importante, es de tipo financiero. El presupuesto universitario no puede seguir creciendo desmesuradamente y mucho menos sin que se introduzcan elementos racionalizadores del gasto.

La necesaria racionalización en el uso de los recursos puede ser implementada de dos modos. Bien mediante una política autoritaria y de fuerza, o bien mediante el logro de un acuerdo básico entre los miembros organizados de la comunidad universitaria. La primera fórmula ya ha tenido sus defensores en las universidades; para quienes la sostienen lo indicado es proceder a restringir el cupo, expulsar a los profesores desagradables y despedir sin más a los empleados supuestamente sobrantes. Mientras dure el sistema democrático-populista en Venezuela esta vía no será implementada, pero el asunto es si, de no implementarse correctivos a tiempo, el caos de la educación superior no contribuirá a la desestabilización de tal sistema.

Para quienes creemos que ante el autoritarismo es preferible la democracia siempre, por defectuosa que sea, la segunda fórmula es más deseable. Por lo demás, introduciendo mediante el consenso elementos racionalizadores y de eficacia en la educación se contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema político al menos en uno de sus puntos más críticos.

El consenso para reducir el gasto e incrementar la productividad es hoy la única salida posible aunque, hay que reconocerlo, difícil. Seguir inflando el presupuesto sin hacer correcciones nos conducirá irremediamente a que den-



tro de poco nos lo recorten por la fuerza.

## LA UNIVERSIDAD Y LOS PARTIDOS

Se ha dicho que la excesiva partidización de la vida universitaria es la causa final de todos sus males. Esta opinión es tan exagerada como la de aquellos que en la práctica niegan la existencia de intereses universitarios relativamente superiores a los partidistas. No pretendo defender la tesis de que estos intereses están dados o que existe alguna fuente suprema de sabiduría capaz de definirlos. No pretendo sustituir un autoritarismo por otro. Los intereses de la universidad sólo pueden ser definidos por sus miembros, pero hace falta precisar que es necesario que éstos —y en especial los militantes de partido— se dispongan a formular las bases de un acuerdo mínimo para alcanzar una mayor eficiencia y, por otro lado, que los partidos den cabida a la participación de sectores y organizaciones no partidistas.

El desprestigio de los partidos nacionales también se vive en las universidades. En el movimiento estudiantil esto ha quedado evidenciado por la altísima abstención en las elecciones y por el nacimiento de organizaciones estudiantiles no partidistas que le disputan la dirigencia a los partidos. Esta situación evidencia la necesidad de buscar formas de participación más directa y no mediaticada por aquellos.

Por lo demás, las campañas electorales y los despliegues propagandísticos han contribuido a la destrucción del ambiente y del ornato de las universidades, al tiempo que hacen incrementar los costos de limpieza y mantenimiento.

Es ingenuo y antidemocrático plantear la supresión de los partidos, pero la ampliación y el mejoramiento de la democracia pasa por presionarlos para que acepten otras formas de participación política al margen de las que ellos controlan. Este razonamiento, válido para el país, es también adecuado para las universidades. La comunidad universitaria, por su parte, tiene el reto de crear organizaciones gremiales capaces de anteponer los intereses de sus asociados a

los partidistas.

## LA CUOTA DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES

Ya en otro lugar hemos dicho antes que el papel de los gremios es defender a sus afiliados y, en una sociedad democrática y pragmática como la venezolana, esta labor consiste en darles los mayores beneficios materiales posibles para garantizar su apoyo electoral. Por esto, el que las asociaciones intrauniversitarias tengan espíritu gremialista no soluciona totalmente el problema que nos ocupa.

De nada vale que la comunidad tenga disposición, cosa que por cierto está lejos de verse en la realidad, si las autoridades no definen una estrategia para hacer eficientes y verdaderamente autónomas a las universidades.

## REFLEXIONES FINALES

No sería bueno concluir este artículo, por lo demás de carácter muy general, sin al menos hacer una cuantas precisiones que podrían formar parte de una estrategia que reclaman nuestras universidades. No hay duda de que algunos de los puntos que siguen pueden resultar, a primera vista, antipáticos, pero

de su implementación depende en parte el que podamos garantizar el futuro autónomo de aquéllas. La mayoría de las formulaciones que siguen han sido ya propuestas por miembros de la comunidad universitaria, algunos muy conservadores y otros no tanto, pero la actual crisis presupuestaria hace necesario recordarlas.

1. Buscar fuentes alternas de financiamiento que tiendan a liberar a las universidades, al menos parcialmente, de la dependencia con respecto al Estado. Habría que generar proyectos que se autofinancien y contratos con entes públicos y privados que arrojen dividendos.
2. Sincerar el pago de servicios de transporte, comedores y servicios administrativos.
3. Establecer criterios claros y eficientes para implementar la matrícula diferencial. Está bastante claro que a las universidades públicas asisten estudiantes con suficientes recursos como para pagar más por su educación que los que tienen menos.
4. Ampliar, mejorar y dotar bien a las bibliotecas para evitar gastos excesivos en reproducción de materiales. Así mismo, vitalizar a los bancos de libros para hacer préstamos, a bajo precio, a los estudiantes de recursos escasos.
5. Implementar medios para garantizar la eficiencia de las tareas desempeñadas por docentes, investigadores y empleados. Estos tienen que ir desde controles eficientes de asistencia, facilidades para el mejoramiento profesional y evaluaciones periódicas y objetivas.
6. Que la comunidad genere formas de organización extrapartidistas que modifiquen la actitud de los partidos haciendo que la polémica y la competencia se centren en asuntos gremiales y académicos.

Estas medidas no son suficientes, habría que producir cambios más hondos, pero si ya aquéllas son casi utopías, estos otros son inimaginables.

